



Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE GARANTÍAS
EN LO PENAL ECONÓMICO N° 9

381/2025/

Buenos Aires, de diciembre de 2025

AUTOS:

Para dictar sentencia en la causa CPE 381/2025 (int. 942), caratulada "*B... SA y otros sobre infracción ley 24144*" del registro de la Secretaría nro. 18 de este Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico nro. 9, a mi cargo, en la que por infracción al Régimen Penal Cambiario se ha instruido sumario administrativo nro. 8067, Expediente N°..., ante el Banco Central de la República Argentina, contra B... SA (CUIT N° ...), N. N. C. (DNI N° ...), G. M. P. (DNI N° ...) y R. A. R. (DNI N° ...).

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. Que el objeto de este proceso se encuentra dado por la realización de doce operaciones de cambio por parte de los clientes del banco sumariado: E. D. SRL, R. SAS y O. M. SRL, bajo los códigos de concepto "B05 - Pagos anticipados de importaciones de bienes (excepto bienes de capital)", durante los meses de junio a agosto de 2020. El Banco Central de la República Argentina sostuvo que la información respaldatoria con la que contaba B... SA al momento de cursar las operaciones de cambio no resultaba suficiente a fin de asegurar el carácter genuino de aquellas, de acuerdo a las disposiciones vigentes en la materia.

2. Que el Banco Central de la República Argentina, en lo que interesa para el desarrollo de la presente, ordenó instruir sumario contra B... SA y los



señores N. N. C., G. M. P. y R. A. R. por presunta infracción al artículo 1, incisos e) y f), y al artículo 2, inciso f) de la Ley de Régimen Penal Cambiario. Asimismo, el 27 de marzo de 2025 el BCRA declaró la causa concluida para definitiva, cesando en consecuencia la competencia del ente y resultando desinsaculado este tribunal.

3. Que el artículo 9 de la ley 19359 establece expresamente la posibilidad de que, concluida la sustanciación del sumario respectivo, en sede judicial se disponga la realización de las pruebas que hayan sido denegadas por la jurisdicción administrativa cuando el impugnante hubiera insistido en ellas al interponer el recurso y el juzgado decidiese su procedencia.

4. Que la defensa de B... SA, N. N. C., G. M. P. y R. A. R. realizó una presentación ante este tribunal solicitando que, previo a resolver, que se requiriera a la Unidad de Información Financiera (UIF) la remisión de las presentaciones realizadas por la entidad bancaria (Reportes de Operaciones Sospechosas - ROS) con relación a las empresas E. D. SRL, R. SAS y O. M. SRL, con indicación de la fecha en la que las mismas fueron remitidas.

En dicha presentación señaló que, conforme surge de las actuaciones digitales incorporadas al sumario cambiario, el 4 de octubre de 2023 el B... informó a la UIF que su sector de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo había presentado oportunamente los respectivos ROS referidos a esas sociedades, en virtud de las inconsistencias detectadas en sus operaciones de comercio exterior durante el año 2020. Por tal motivo, alegaron que dicha información resultaba





Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE GARANTÍAS
EN LO PENAL ECONÓMICO N° 9

381/2025/

trascendente para ejercer su derecho constitucional de defensa en este proceso cambiario, solicitando el levantamiento del secreto vigente al sólo efecto de corroborar su cumplimiento normativo.

Efectuado el requerimiento, fue respondido por el organismo el 5 de octubre de 2023 mediante el informe reservado IF-..., en el cual la UIF se negó a cumplir con lo requerido, fundándose en que resultaba necesario que fuera un juez con competencia en materia penal, en el marco de una causa penal, quien decidiera relevar al organismo del deber de guardar secreto.

5. Que, previo a ingresar en el análisis de las medidas probatorias diligenciadas, resulta ineludible referirse a la distribución del esfuerzo probatorio en el marco de los procesos penal-económicos complejos. Si bien en el ámbito punitivo rige el principio de inocencia y la carga de la prueba recae, en principio, sobre el órgano acusador, la moderna doctrina procesal y la jurisprudencia han recibido la teoría de las cargas probatorias dinámicas o del deber de colaboración procesal.

Según este principio, el *onus probandi* no depende rígidamente de la posición procesal de actor o demandado —o en este caso, acusador e imputado—, sino que debe recaer sobre aquella parte que se encuentre en mejores condiciones técnicas, profesionales o fácticas para producir la prueba o acceder a la información controvertida.

En el caso en examen, esta regla cobra vital importancia dado que nos encontramos ante un esquema donde la prueba dirimente para la defensa (la existencia y fecha



de los Reportes de Operaciones Sospechosas) se encuentra bajo la custodia exclusiva y excluyente de un organismo del propio Estado Nacional (la Unidad de Información Financiera). Por tanto, cuando el imputado ha demostrado la imposibilidad material de aportar el documento por encontrarse amparado por secretos legales que sólo el Estado puede levantar, se activa para la Administración Pública un deber agravado de transparencia y colaboración. Interpretar lo contrario implicaría imponer al justiciable una *probatio* diabólica, vulnerando la garantía de la defensa en juicio y la igualdad de armas consagradas en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

6. Que, en este contexto, la defensa de B... SA y de los sumariados solicitó ante este Juzgado que se requiriera a la Unidad de Información Financiera (UIF) la remisión de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculadas a las empresas E. D. SRL, R. SAS y O. M. SRL, indicando fehacientemente la fecha de su recepción.

Los letrados destacaron que, tal como surge de las actuaciones, el 4 de octubre de 2023 la entidad bancaria ya había puesto en conocimiento de la UIF dichas circunstancias para ejercer su derecho de defensa ante el ente rector, solicitando el levantamiento del secreto. Sin embargo, dicha petición fue rechazada por el organismo el 5 de octubre de 2023 mediante el informe reservado IF-..., bajo el argumento de que sólo un juez penal, en el marco de una causa de esa naturaleza, poseía la potestad para relevarlos del deber de confidencialidad.

7. Que, en virtud de lo solicitado este Tribunal, se libró oficio a la Unidad de Información





Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE GARANTÍAS
EN LO PENAL ECONÓMICO N° 9

381/2025/

Financiera requiriendo copia de las presentaciones aludidas y sus fechas de remisión. No obstante, el 5 de octubre de 2025, la UIF impugnó el requerimiento jurisdiccional mediante el Informe Reservado N° IF-... En su respuesta, el organismo se amparó en la cláusula quinta del Convenio celebrado con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sosteniendo que los tribunales deben abstenerse de exigir la remisión de los informes de operaciones sospechosas, y limitándose a ofrecer la colaboración de sus agentes para la elaboración de informes de inteligencia.

8. Que, ante la insistencia de la defensa –quien remarcó que las razones de confidencialidad devenían abstractas dado que fue la propia institución bancaria la autora de los reportes que ahora solicita como prueba de descargo–, se libró una nueva intimación a la UIF por el término de 48 horas.

Como respuesta a este último requerimiento, la Unidad acompañó en formato papel el Informe Reservado N° IF-..., remitiendo el INFORME DE INTELIGENCIA (IDI) N° Sin embargo, el organismo aclaró expresamente que dicho documento *"no constituye, per se, un elemento probatorio"* y solicitó su estricta reserva, impidiendo su utilización plena como evidencia en el proceso. En consecuencia, se procedió a su digitalización, incorporación al sistema Lex100 y reserva por Secretaría.

9. Que, por el artículo 5 de la Ley de Régimen Penal Cambiario se establece que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA tendrá a su cargo la fiscalización de las personas físicas y jurídicas que operen en cambios y



la investigación de las infracciones previstas en esta ley. Asimismo, el artículo 7 de la norma mentada indica que los organismos, entidades o personas humanas que intervengan en el trámite o fiscalización de las operaciones de cambio suministrarán al ente rector los elementos de juicio de que dispongan y que éstos consideren necesarios para la comprobación de las infracciones.

En este sentido, la negativa por parte de la Unidad de Información Financiera de brindar información relevante para la teoría del caso de la defensa –tanto en el marco del sumario cambiario, como así también en la oportunidad en la que fue elevado a conocimiento de este Tribunal para dictar sentencia–, justifica que esta judicatura vele por las garantías del proceso. Es deber de la magistratura evitar que subsistan actuaciones que puedan comprometer el derecho de defensa y, por ende, la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el artículo 75, inc. 22, de la Carta Magna, de acuerdo con los artículos 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

10. Que uno de los efectos más relevantes que se derivan del principio de inviolabilidad de la defensa en juicio es la necesidad de que el proceso y el juicio sean auténticamente contradictorios. La efectividad del derecho de defensa se mide, también, en que el imputado cuente con todos los medios necesarios para fundar sus postulados y pretensiones, en un equilibrio funcional con las facultades de los acusadores. De este modo, si el encartado se ve impedido de hacerlo por alguna razón





Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE GARANTÍAS
EN LO PENAL ECONÓMICO N° 9

381/2025/

práctica —como el acceso denegado a la información o la falta de recursos—, se rompe la llamada "igualdad de armas" (Cfr. Binder, Alberto M., Derecho Procesal Penal. Tomo VI. Teoría del juicio de conocimiento. Condiciones de verificación. Juicio imparcial. Ad Hoc, Buenos Aires, 2022, p. 325/327).

En este caso la reticencia de la UIF imposibilitando el descargo, la producción y la prueba en sí, afecta directamente el artículo 18 de la Constitución Nacional y las convenciones internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Estas normas resguardan el derecho a la tutela administrativa y judicial efectiva, violando las formas sustanciales de la garantía de la defensa, la cual asegura al inculpado la posibilidad de ofrecer prueba de su inocencia o de su derecho, sin que corresponda diferenciar entre causas criminales, juicios especiales o, como en este caso, procedimientos administrativos.

La determinación de la existencia de los Informes de Operaciones Sospechosas (ROS) por parte del B..., así como de las fechas exactas en los que aquellos habrían sido realizados, constituye un aspecto central y dirimente. Sólo a través de esa información es posible evaluar si la entidad y sus responsables cumplieron con la conducta de control y debida diligencia que se les exige normativamente frente a los hechos imputados en el presente sumario.

11. Que, sin perjuicio de la estricta reserva solicitada por la Unidad de Información Financiera respecto del INFORME DE INTELIGENCIA (IDI) N° ... remitido en formato papel, lo cierto es que de su lectura y



análisis no resulta posible determinar fehacientemente la existencia –o la inexistencia– de los Reportes de Operaciones Sospechosas invocados por la defensa de los sumariados.

En este estado de situación probatoria, el Tribunal se encuentra materialmente imposibilitado de reconstruir con certeza la conducta imputada para fundar un reproche. En consecuencia, se halla vedado para determinar la responsabilidad penal cambiaria por la presunta comisión de las infracciones que a los encartados les fueron atribuidas por el Banco Central de la República Argentina, toda vez que falta el elemento de juicio esencial para valorar la falta de diligencia de la entidad.

12. Que, frente a la negativa de un organismo del Estado nacional para aportar la prueba directa para la resolución del caso, cabe tener por cierto el descargo del banco sumariado en cuanto a que oportunamente formuló el Reporte de Operaciones Sospechosas correspondiente. En virtud de ello, y por aplicación del artículo 9 de la Ley de Régimen Penal Cambiario (confr. CNAPE, Sala A, Reg. Int. 159/20), corresponde dictar una resolución remisoría poniendo fin al proceso respecto de los imputados.

Asimismo, teniendo en cuenta que en el presente caso se ha visto comprometida la facultad jurisdiccional de juzgar las posibles infracciones al régimen de cambios en armonía con las garantías constitucionales de los sumariados, y considerando que una situación análoga a la aquí descrita podría verificarse en futuros sumarios, corresponde anotar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Unidad de Información Financiera y al Grupo Egmont. El objeto de dicha comunicación será poner de





Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE GARANTÍAS
EN LO PENAL ECONÓMICO N° 9

381/2025/

resalto la grave inconveniencia que genera la negativa de la Unidad de Información Financiera a informar si un sujeto obligado cumplió con la formulación de un informe de operación sospechosa, máxime cuando para fundar dicha omisión se invoca un convenio de colaboración celebrado con la propia máxima autoridad del Poder Judicial de la Nación.

Por ello corresponde dictar la siguiente

SENTENCIA:

I. ABSOLVIENDO DE CULPA Y CARGO a B... SA (CUIT N° ...), N. N. C. (DNI N° ...), G. M. P. (DNI N° ...) y R. A. R. (DNI N° ...), en orden a las conductas por las que se les instruyera sumario y que fueron encuadradas dentro de las previsiones del artículo 1, incisos e) y f), y artículo 2, inciso f), de la Ley de Régimen Penal Cambiario 19.59 (al por Dic. 480/95).

II. SIN COSTAS (arts. 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

Tómese razón, protocolícese y notifíquese.

Oportunamente, devuélvase el INFORME DE INTELIGENCIA (IDI) N° a la Unidad de Información Financiera, efectúense las comunicaciones ordenadas en los términos del considerando 12 y, previa certificación actuarial, publíquese y archívese.

Ante mí:

Sec. 18

Mlb

